## **COLECCIÓN «PENALCRIM» J.M. BOSCH EDITOR**



PRINCIPIOS
Y GARANTÍAS
PENALES Y
PROCESALES
EN LA
DOCTRINA
DE LA CIDH
Y EL TEDH

## JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ COORDINADORES

#### **AUTORES**

CARMEN TOMÁS-VALIENTE LANUZA
JUAN M. TERRADILLOS BASOCO
DANIEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
FRANCISCO J. DALL'ANESE
GUILLERMO PORTILLA CONTRERAS
PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ
KAI AMBOS
CARLOS TIFFER SOTOMAYOR
GLORIA GONZÁLEZ AGUDELO
DOUGLAS DURÁN CHAVARRÍA
ALFREDO CHIRINO SÁNCHEZ
GISELLE BOZA





La importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la integración del mismo, dentro del Derecho interno de los diversos Estados, como derecho aplicable, le ha conferido un carácter constitucional o supraconstitucional.

La relevancia que ha adquirido el diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, les ha llevado a compartir muchas de sus decisiones con una cierta frecuencia.

En la presente obra, profesores españoles, costarricenses y alemanes escriben sobre la doctrina europea y centroamericana corroborando ese diálogo entre el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con este primer título «Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH» y con la voluntad de llevar esta obra al mayor nivel de difusión posible, se ha materializado un acuerdo de colaboración entre Editorial Jurídica Continental de Costa Rica, 1997 y J.M. Bosch Editor de España -cuyos orígenes se remontan a 1889- para publicar esta obra en ambos países con idéntico contenido, reflejando un esfuerzo de divulgación científica conjunto, sobre una materia que trasciende los marcos del interés jurídico y político criminal nacionales y dando así comienzo a una serie de ediciones jurídicas de calidad, con autores de ambas regiones.







## JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ

COORDINADORES

# PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PENALES Y PROCESALES EN LA DOCTRINA DE LA CIDH Y EL TEDH

#### **AUTORES**

CARMEN TOMÁS-VALIENTE LANUZA
JUAN M. TERRADILLOS BASOCO
DANIEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
FRANCISCO J. DALL'ANESE
GUILLERMO PORTILLA CONTRERAS
PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ
KAI AMBOS
CARLOS TIFFER SOTOMAYOR
GLORIA GONZÁLEZ AGUDELO
DOUGLAS DURÁN CHAVARRÍA
ALFREDO CHIRINO SÁNCHEZ
GISELLE BOZA





Esta obra ha sido examinada por los siguientes miembros del Comité Científico editorial:

Dr. Alfredo Abadías Selma. Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal, UNIR Dr. Miguel Bustos Rubio. Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Internacional de La Rioja

© MARZO 2022 JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ COORDINADORES

© MARZO 2022



#### Librería Bosch, S.L.

http://www.jmboscheditor.com http://www.libreriabosch.com E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-19045-44-7 ISBN digital: 978-84-19045-45-4 D.L: B 6583-2022

ISBN EJC, Costa Rica: 978-9930-520-94-9

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ ( +34 672 661 611

Printed in Spain - Impreso en España

#### Coordinadores del Comité Científico

#### Dr. Alfredo Abadías Selma

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal y Criminología Universidad Internacional de La Rioja

#### Dr. Miguel Bustos Rubio

Profesor Titular de Derecho Penal Universidad Internacional de La Rioja

#### Miembros del Comité Científico

#### Dra. María del Carmen Armendáriz León

Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal Universidad Complutense de Madrid

#### Dr. Ignacio Berdugo Gómez De La Torre

Catedrático de Derecho Penal Universidad de Salamanca

#### Dr. Sergio Cámara Arroyo

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED

#### Dra. Beatriz Cruz Márquez

Profesora Titular de Derecho Penal y Criminología Universidad de Cádiz

#### Dr. Bernardo Feijoo Sánchez

Catedrático de Derecho Penal Universidad Autónoma de Madrid

#### Dr. Juan Carlos Ferré Olivé

Catedrático de Derecho Penal Universidad de Huelva

#### Dr. Octavio García Pérez

Catedrático de Derecho Penal Universidad de Málaga

#### Dra. Alicia Gil Gil

Catedrática de Derecho Penal Universidad Nacional de Educación a Distancia

#### Dra. María Concepción Gorjón Barranco

Profesora Contratada Doctora de Derecho Penal Universidad de Salamanca

#### Dr. José León Alapont

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal Universidad de Valencia

#### Dra. Paz I Joria García

Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Valencia

#### Dr. Víctor Manuel Macías Caro

Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

#### Dr. Esteban Mestre Delgado

Catedrático Universidad de Alcalá de Henares

#### Dr. Fernando Navarro Cardoso

Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

#### Dr. Félix María Pedreira González

Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal Universidad Complutense de Madrid

#### Dra. Ana María Peligero Molina

Profesora Ayudante Doctora de Criminología Universidad Internacional de La Rioja

#### Dra. Ana Isabel Pérez Cepeda

Catedrática de Derecho Penal Universidad de Salamanca

#### Dr. Francisco Rodríguez Almirón

Profesor Derecho penal Universidad de Granada

#### Dr. Enrique Sanz Delgado

Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Alcalá de Henares

#### Dr. Pere Simón Castellano

Profesor Titular de Derecho Constitucional Universidad Internacional de La Rioja

## ÍNDICE

	SENTACION. Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez, Prof. Dr. Luis Ramón Ruiz Ro- ez	19
CAPÍ'	TULO I	
LA D	DOCTRINA DE LAS OBLIGACIONES POSITIVAS DEL ESTADO	
Y SI	J REFLEJO EN MATERIA PENAL EN LA JURISPRUDENCIA	
DEL	TEDH. Carmen Tomás-Valiente Lanuza	27
1.	Introducción. La doctrina general de las obligaciones positivas como con-	
	texto	28
2.	¿De la función protectora del Estado al reconocimiento de derechos de las víctimas? Relación de la Jurisprudencia del TEDH con la de la CIDH y	
	con las construcciones del derecho de la víctima al castigo del autor	32
3.	Las concretas obligaciones positivas del Estado en relación al ejercicio del	
	Ius Puniendi	37
	3.1. Deberes de criminalización y previsión legal de una pena suficiente	39
	3.2. Deberes de investigación	42

	3.3.	Deberes relativos a la celebración del proceso. Obstáculos procesales	4.6
		y prescripción	46
		a) Obstáculos normativos de índole procesal	46
	3.4.	b) La prescripción  Deberes de sancionar suficientemente: el control sobre la califica-	48
	3.4.	ción y sobre el <i>quantum</i> de la pena impuesta	50
	3.5.	Deberes de ejecución de la pena	55
	3.6.	Algunas observaciones	56
4.		per estatal de evitar delitos	60
т.	4.1.	El deber de evitar delitos graves previsibles contra personas concre-	00
	7.1.	tas: el test Osman	61
	4.2.	El deber de protección de la sociedad	67
	4.3.	Algunas consideraciones	73
5.		grafia.	79
		σ	
	ULO II		
		D PENAL: TIPICIDAD, NO RETROACTIVIDAD, NON BIS	02
		ıan M. Terradillos Basoco	83
1.		lucción	83
2.		idad penal	85 85
	2.1.	Legalidad y tipicidad (nullum crimen sine lege)	85
		2.1.1. Nullum crimen sine lege poenalis	86
		2.1.2. Remisión normativa	87
		2.1.3. Previsibilidad	89
	2.2	2.1.4. Legalidad y principios generales del Derecho	93
	2.2.	Legalidad y pena (nulla poena sine lege)	97
	2.3.	Legalidad e irretroactividad (nullum crimen, nulla poena sine praevia	101
2	7.7. 7	lege)	
3.		is in idem	104
	3.1.	Non bis in idem administrativo y administrativo-penal	105
4	3.2.	Non bis in idem penal	110
4.	Biblio	grafía.	112
	ULO III		
		TENCIA DEL TRIBUNAL PENAL DE APELACIÓN O CA-	
		N LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERI-	117
		DERECHOS HUMANOS. Daniel González Álvarez	115
1.	Introd	lucción	116

2.	Las f	unciones de los tribunales de alzada en los Códigos latinoamericanos				
3.	El derecho al recurso como un mecanismo de garantía de derechos humanos					
4.		cterísticas fundamentales del recurso contra la sentencia penal en la				
''	Jurisprudencia de la Corte Interamericana					
	4.1.	Recurso ordinario				
	4.2.	Recurso accesible				
	4.3.	Recurso eficaz				
	4.4.	Recurso integral				
	4.5.	Recurso disponible				
	4.6.	Recurso inmediato				
5.	Com	petencia de la Corte Interamericana para conocer de las impugnacio-				
,						
6.		ompetencia del Tribunal de Alzada en la jurisprudencia de la Corte americana				
	6.1.	Flexibilidad en la admisión del recurso				
	6.2.	Deber de realizar un análisis amplio y exhaustivo sobre los motivos				
	0.2.	de agraviode				
	6.3.	Deber de realizar efectiva tutela judicial				
	6.4.	Deber de analizar hechos y prueba en segunda instancia				
	6.5.	Posibilidad de utilizar prueba indiciaria, circunstancial y presuncio-				
	6.6.	nes				
	6.7.					
7		Funciones y tareas objetivamente regladas				
7.		reflexiones finales sobre las funciones de los Tribunales de Alzada				
8.		ografía				
9.		luciones.				
	9.1.					
	9.2.	Del Tribunal Constitucional de Costa Rica				
CAP	ÍTULO I	v				
DEF	RECHO	A RECURRIR LA SENTENCIA PENAL. Francisco J. Dall'Anese				
1.	Intro	ducción				
2.	Juicio oral y recurso					
3.		Herrera Ulloa				
4.	Recu	rso efectivo y admisibilidad				
	4.1.	Recurso de apelación de sentencia				
	4.2.	Recurso de Casación				
5.	Cond	elusión				
6	Ribliografia					

~ A				$\sim$	\ /
LA	М	IΤι	JL	.U	v

		BICIÓN DE LA TORTURA, LOS TRATOS INHUMANOS Y					
		NTES DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRIBUNAL EURO-					
PEO	DE D	ERECHO HUMANOS. Guillermo Portilla Contreras					
1.	Intro	ducción					
2.	La Pı	rohibición de la tortura según la doctrina del Tribunal Europeo de					
	Derec	chos Humanos					
	2.1.	La dignidad como bien jurídico					
	2.2.	¿Cómo distinguir las modalidades de tortura, tratos inhumanos y degradantes?					
	2.3.	Sujeto activo de las acciones prohibidas por el artículo 3 del Convenio.					
	2.4.	¿Cabe en algún caso la exculpación del delito de tortura?					
	2.5.	Denuncia de la práctica de torturas e inicio de la investigación por parte del Estado					
	2.6.	El Estado como garante de las agresiones en fase de identificación, detención, o prisión					
	2.7.	El uso innecesario de la fuerza policial y rigor innecesario en prisiones.					
	2.8.	Penas y ejecución de penas inhumanas y degradantes					
3.	La condena por el TEDH de las torturas, cárceles secretas y entregas ex-						
	traorc	linarias efectuadas por la CIA en cooperación con los servicios secre-					
	tos eu	iropeos					
	3.1.	El Parlamento europeo, las torturas de la CIA y la cooperación acti-					
		va y omisiva de las democracias europeas					
	3.2.	La jurisprudencia del TEDH sobre las «entregas extraordinarias»,					
	detenciones secretas y torturas practicadas por la CIA con la c						
		plicidad de los servicios secretos europeos					
		a) Primer precedente judicial: caso ABU OMAR y el TEDH					
		b) Entregas extraordinarias y vuelos ilegales en Alemania					
		c) Participación activa y omisiva de funcionarios españoles en las detenciones ilegales y torturas practicadas por la CIA en España					
		d) Otras condenas del TEDH de las entregas extraordinarias y torturas practicadas por la CIA en Macedonia, Polonia, Lituania y Rumanía					
4.	Biblio	ografía					

CAP	ÍTULO V	<b>/</b> I		
			DE LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA: ALGUNOS	
			LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS	
			BRE LA PENA DE MUERTE, LA TORTURA POR	
			(UAL Y LOS TRATOS CRUELES Y DEGRADANTES	
EN I			OS DE RECLUSIÓN. Patricia Vargas González	237
1.	Intro	ducció	n	238
2.	Sobre	e la per	na de muerte	239
3.	De la	tortur	a por agresión sexual y otros tratos crueles, inhumanos y degra-	
	dante	es		244
4.	De lo	s trato	s inhumanos, crueles o degradantes en el ámbito penitenciario	253
5.	Conc	lusion	es	258
6.	Bibli	ografía		259
7.	Jurisp	oruden	cia citada	260
	ÍTULO V		4. D. 4. A. D. O. T. O. O. D. D. D. O. O. O. U. W. 4.	
			ARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMA-	
			BERTADES FUNDAMENTALES (Convenio Europeo	
			umanos - CEDH). Observaciones preliminares so-	263
			y siguientes. Kai Ambos	
			EDH y el Derecho nacional	264
1.			para el derecho procesal penal alemán	267
2.		-	protección (párrafo 1, frase 1)	267
3.			a privación de libertad (párrafo 1, frase 2)	269
	3.1.	•	iisitos generales	269
	3.2.		motivos concretos de detención	270
		a)	Privación de libertad en virtud de una sentencia dictada por	
		4.	un tribunal competente (letra a)	270
		b)	Detención por desobediencia a una orden judicial o para ase-	
			gurar el cumplimiento de una obligación establecida por la	271
		\	ley [letra. b])	271
		c)	La detención provisional, la prisión preventiva y la prisión	272
		1\	provisional (letra c)	272
		d)	La privación de libertad de los menores (letra d)	273
		e)	La privación de libertad de una persona susceptible de pro-	
			pagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un	274
		£)	alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo (letra e)	274
		f)	Prevención de la entrada ilegal en el territorio o contra la cual esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición	
			(letra f)	275
			\1\t1 \tau 1 /	413

JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ | LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ | COORDINADORES

4.	Gara	ntías procesales en caso de privación de libertad (párrafos 2-5)
	4.1.	General
	4.2.	Derecho a la información (párrafo 2)
	4.3.	Garantías procesales especiales para las personas detenidas y encarceladas en virtud del párrafo 1 (c) (párrafo 3)
		a) Derecho a ser conducido sin dilación ante un juez u otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales (p. 1, apartado 1)
		b) Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad (p. 1, segunda parte)
		c) Derecho a la libertad condicionada a una garantía (p. 2)
	4.4.	Derecho a la revisión judicial de la detención (párrafo 4)
	4.5.	Derecho a la indemnización por daños y perjuicios (párrafo 5)
CADÍ	TULO V	711
		MENDOZA Y OTROS VS. ARGENTINA Y LA JUSTICIA
		IVENIL. Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor
1.		ducción
2.		ia Penal Juvenil y Derecho Internacional de los DDHH de los niños
3.		Mendoza y otros vs. Argentina: Estándares derivados
٠.	3.1.	Presentación
	3.2.	Síntesis del caso
	3.3.	Estándares derivados de lo resuelto por la Corte IDH
		a) Prohibición de la aplicación de normas de la Justicia Penal de adultos a personas menores de edad
		b) Proscripción de tratos crueles e inhumanos: la prohibición de las penas perpetuas en perjuicio de personas menores de edad
		c) Atención médica adecuada
		d) Obligación de respetar y garantizar derechos: integridad personal, libertad personal y el Interés Superior del Niño
		e) Rechazo a la doctrina de la situación irregular para justificar la privación de libertad
		f) Garantías judiciales: protección a la vida e integridad de NNA
		g) Deber de adoptar disposiciones en el derecho interno
4.	La si	tuación actual de la Justicia Penal Juvenil en Latinoamérica
5.		entarios finales.
6.		ografía
		0

	ÍTULO I						
		CIA PENAL JUVENIL EN LOS TRIBUNALES DE DERE-					
		MANOS. LA SITUACIÓN EUROPEA. Gloria González Agudelo.					
1.		ducción					
2.		ndares universales y europeos para la protección y promoción de los					
		chos de los niños en la justicia penal juvenil					
2	2.1.	Una justicia adaptada a los niños en Europa					
3.		chos de los niños en el sistema de justicia penal según el TEDH					
	3.1.	Interés Superior del niño en la justicia penal juvenil					
	3.2.	Resocialización					
,	3.3.	Límites referidos a la edad					
4.		cho a un proceso equitativo					
	4.1.	Derecho a la participación					
	4.2.	Derecho a la asistencia letrada: presunción de inocencia y derecho a					
	1.2	la defensa asesoramiento y representación					
_	4.3.	Directivas procesales.					
5.		chos de los niños en detención					
	5.1. 5.2.	Prohibición de la tortura y condiciones de la detención					
	5.2.	Niños en detención administrativa					
,	T7/ ·	5.2.1. Detención, internamiento y expulsión de Niños migrantes					
6.		mas de delitos					
7.		xión final					
8.	Bıblı	ografía					
CAD	ÍTULO )						
		NCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS					
		S EN EL CASO «INSTITUTO DE REEDUCACIÓN DEL ME-					
NOI	R» VE	RSUS PARAGUAY Un referente jurisprudencial sobre el					
		os Derechos Humanos en materia de personas menores					
de e	edad e	n conflicto con la norma penal. Douglas Durán Chavarría					
1.	Intro	ducción					
2.	Del p	procedimiento inicial ante la Corte					
3.	De lo	De los hechos que se tuvieron por demostrados					
	3.1.	Hechos probados relativos a las condiciones carcelarias en el Institu-					
		to					
	3.2.	Hechos probados relativos a aspectos jurídicos y del debido proceso					
4.	Sobr	Sobre el fondo del asunto					
	4.1.	Sobre la posición de garante del Estado, el principio de dignidad					
		humana y el principio del interés superior del niño					

JAVIER LLOBET RODRÍGUEZ | LUIS RAMÓN RUIZ RODRÍGUEZ | COORDINADORES

	4.2.	Sobr	e los problemas de sobrepoblación carcelaria en el Instituto
	4.3.		e las condiciones de vida de los jóvenes recluidos en el Instituto
		y la p	pobre atención que se les brindaba
	4.4.	Sobre	e el personal penitenciario en el Instituto
	4.5.	Sobre	e los aspectos jurídicos en general y del debido proceso
		a)	De la prisión preventiva
		b)	Sobre la lentitud de los procesos a los que estaban sometidas las personas privadas de libertad en el Instituto
		c)	Sobre la inexistencia, a la sazón, de un procedimiento y de unos tribunales especializados en materia de niños y niñas en conflicto con la ley
		d)	Falta de separación entre niños y adultos
5.	Conc	lusione	28
6.	Biblio	ografía	
Juris	pruden	cia	
VAE los ' inte	DAS DE vasos rnacio	E LIBE comu nales.	ERCA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRI- ERTAD EN UNA PERSPECTIVA COMPARADA Sobre nicantes de la jurisprudencia de ambos tribunales Alfredo Chirino Sánchez
1.			n
2.	Dere	chos H	nero: aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de lumanos a los derechos de los privados de libertad
3.	recho	s Hum	undo: aporte de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De- nanos a los derechos de los privados de libertad
4.	_		ero: comparaciones, semejanzas, coincidencias y puntos a con-
5.			conclusión: una reflexión necesaria sobre las personas privadas y el respeto a sus Derechos Humanos
6.			
	ÍTULO X		
			EXPRESIÓN Y SANCIÓN PENAL EN EL SISTEMA
			ANO DE DERECHOS HUMANOS. Giselle Boza
1. ว			n
۷.	Las e	XDTESIC	nies sobre asumos budiicos como criterio de ponderación

3.		La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión			
4.		nción penal y la libertad de expresión	45		
5.		Las tendencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos			
	5.1.	La sanción penal puede resultar desproporcionada: Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica	45		
	5.2.	La medida penal no es contraria a la Convención: Caso Kímel vs. Argentina	46		
	5.3.	La sanción civil no siempre es la vía idónea. Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina	46		
	5.4.	Los Estados están obligados a la tutela judicial del honor: Caso Mémoli vs. Argentina	47		
	5.5.	La sanción penal en expresiones de interés público es contraria a la Convención. Caso Álvarez Ramos vs. Venezuela	47		
6.	Conc	Conclusiones			
7.	Bibliografía				

#### Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez

Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica

#### Prof. Dr. Luis Ramón Ruiz Rodríguez

Catedrático de la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera

## PRESENTACIÓN

Se parte de la importancia, a nivel universal, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la integración del mismo, dentro del Derecho interno de los diversos Estados, como derecho aplicable, lo que le ha conferido un carácter constitucional o supraconstitucional.

Debe resaltarse la relevancia que ha adquirido el diálogo entre Cortes, en particular entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de modo que con frecuencia en la toma de sus decisiones, tanto la Corte Interamericana, como el Tribunal europeo, se toman en cuenta entre sí.

En el presente volumen de la colección, escriben profesores españoles, costarricenses y alemanes. Esperamos que a través de ello se logre efectivamente un diálogo entre la doctrina europea y la centroamericana, que refleje, además, el diálogo entre el Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Debe mencionarse que la Convención Europea de Salvaguarda de los derechos del hombre y libertades fundamentales, de 1950, y la Convención

Americana de Derechos Humanos, de 1969, tienen como antecedente cercano, la declaración americana de los derechos y deberes del hombre de 1948 y la declaración universal de derechos humanos de 1948, con respecto a la aprobación de las cuales, tuvo una gran influencia, la experiencia del quebranto extremo de la dignidad humana y de los derechos humanos, que se dio, por ejemplo, bajo el régimen nacionalsocialista. Sin embargo, no fue sino hasta la Convención Europea de Salvaguarda de los derechos del hombre y libertades fundamentales, que se llegó a aprobar, por la vía de un tratado internacional, un documento general sobre la protección de los derechos humanos. Este figuró como antecedente, con respecto a los derechos civiles y políticos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Debe destacarse, además, la importancia de la regulación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como órgano jurisdiccional de protección de los derechos humanos. El 21 de enero de 1959, fue establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo luego renovado el primero de noviembre de 1998, con la entrada en vigor del Protocolo 11 al Convenio de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. No fue sino hasta el caso Lawless contra Irlanda, de primero de julio de 1961, en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dictó su primera sentencia de fondo. Antes de ello, había ordenado dos sentencias, pero sobre aspectos procedimentales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que había sido firmada en noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de julio de 1978, al reunirse la cantidad de ratificaciones necesaria, para la entrada en vigor. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estatuto de la Corte Interamericana fue aprobado mediante Resolución N° 448, adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979.

En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las primeras sentencias de la jurisdicción contenciosa, fueron ordenadas el 26 de

junio de 1987, en el caso Godínez Cruz Vs. Honduras; el caso Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras y el caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Antes de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado varias sentencias en la jurisdicción consultiva. Las primeras opiniones consultivas fueron resueltas el 24 de septiembre de 1982, siendo éstas: la Opinión Consultiva OC-2/82, sobre «El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Opinión Consultiva OC-1/82, sobre «Otros tratados». Debe mencionarse, además, la resolución dictada en la jurisdicción contenciosa, que declaró inadmisible la autodenuncia que planteó el Gobierno de Costa Rica en el caso Viviana Gallardo, dictada el 15 de julio de 1981.

Puede apreciarse que la función jurisdiccional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, empezó a ejercerse varias décadas antes que la correspondiente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, debe destacarse el período largo que transcurrió desde la constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la primera sentencia dictada en la jurisdicción contenciosa.

Gran parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente, en sus primeros años, ha estado relacionada con el quebranto de los derechos humanos fundamentales, es decir el núcleo duro de los derechos humanos, en particular con casos de detenciones arbitrarias, práctica de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones forzadas. Muchas de esas sentencias, aun algunas de las dictadas más recientemente, se han ocupado de quebrantos de los derechos humanos que se produjeron durante las dictaduras latinoamericanas de la Seguridad Nacional. En el tema de las desapariciones forzadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció precedentes de gran importancia a nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Varios de los artículos del presente libro, tanto, de los autores costarricenses, como de los europeos, están relacionados precisamente con los quebrantos extremos de la dignidad humana, que forman parte del núcleo duro de los derechos humanos, por ejemplo la prohibición de la tortura.

A través de los años, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha

diversificado en las temáticas a tratar, dentro de las cuales debe reconocerse, que sigue ocupando un lugar importante, la temática del sistema penal y los derechos humanos, el que trata el presente volumen.

En el caso costarricense, la Sala Constitucional ha reconocido el valor supraconstitucional de los tratados, e incluso otros instrumentos, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dentro de los que se incluye la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los otros instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Almonacid Arellano Vs. Chile, ha exigido un control de convencionalidad, por todas las autoridades estatales. Este control de convencionalidad, exige no solamente la aplicación por los diversos operadores del sistema jurídico de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y los otros instrumentos del sistema interamericano, sino también la aplicación de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun en asuntos en que el Estado no haya sido parte. A pesar de ello, el control de convencionalidad se ha dificultado en los diversos países latinoamericanos, de lo cual un ejemplo, es la falta de realización de un control de convencionalidad sobre las causales de prisión preventiva, en donde no se ha seguido lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solamente ha admitido las causales de peligro concreto de fuga y de peligro concreto de obstaculización. En el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional, aunque ha admitido la exigencia de un control de convencionalidad, ha reclamado para sí el mismo, de modo que se ejerza un control concentrado de la convencionalidad y no uno de carácter difuso. A pesar de ello, no ha estado muy dispuesta la Sala Constitucional, en general, a llevar a cabo ese control de convencionalidad, de lo cual precisamente una expresión es en lo relativo a la regulación de la prisión preventiva, en el Código Procesal Penal.

En lo atinente a las sentencias dictadas en la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en contra de Costa Rica, destaca, especialmente, la dictada en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, el 2 de julio de 2004, que precisamente es tratada en varios de los artículos del presente libro. Cabe mencionar, la sentencia ordenada en el caso Amrhein y otros vs. Costa Rica, de 25 de abril de 2018. La primera de ellas trata de temas como la libertad de expresión, el principio de imparcialidad de los

jueces y el derecho a recurrir, mientras la segunda sentencia, los presupuestos de la prisión preventiva, la duración de la prisión preventiva, las condiciones de privación de libertad, el derecho a recurrir y el principio de imparcialidad.

Por su parte, las resoluciones del TEDH, tienen plena validez en los sistemas jurídicos de los países firmantes, deviniendo esta obligación de reconocimiento en el ordenamiento jurídico español de lo establecido en el artículo 10.2 de la Constitución, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, siendo el propio tribunal quien se ha encargado de afirmar la obligatoriedad de su jurisprudencia *erga omnes*, especialmente, desde la sentencia *Irlanda c. Reino Unido*, STEDH de 18 de enero de 1978. Esta jurisprudencia afecta tanto a las violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, como al establecimiento de los criterios que valoran dicha vulneración, pasando por el señalamiento de carencias de los ordenamientos jurídicos de los Estados parte que sean relevante para la protección de los Derechos humanos.

En este sentido, resulta destacable la sentencia dictada en el denominado Asunto Riera Blume de 1997, porque permitió en su momento dictar una doctrina novedosa sobre los límites de la limitación de la libertad individual por parte de la autoridades, anclada en la necesidad de valorar circunstancias particulares de la detención en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias del detenido que, hasta ese momento, no habían sido objeto de análisis directo por parte del TEDH, aunque el Auto del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2000 consideró que una sentencia del TEDH no puede considerarse en sí misma un cambio de jurisprudencia.

En cuanto a los diversos artículos del libro, debe hacerse mención a los relacionados con la justicia penal juvenil, en el ámbito americano y europeo, justicia que ha tenido un gran desarrollo a partir de la aprobación de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña.

Por otro lado, debe resaltarse el desarrollo que se hace, en varios artículos, de las condiciones privación de libertad y los problemas del hacinamiento

carcelario. Este en Latinoamérica es una problemática de carácter crítica, tanto en la justicia penal juvenil, como en la de adultos.

El tema de la garantía del debido proceso, también ocupa varios de los artículos. Igualmente, debe destacarse el desarrollo de garantías básicas del sistema penal, como son: el respeto del principio de legalidad, la prohibición de retroactividad de la ley y el non bis in ídem.

En contra de la consideración de los derechos humanos, como obligaciones del Estado negativas de los Estados, que obligan a que se abstenga de quebrantarlos, es importante, el desarrollo que se hace en alguno de los artículos, que implican el deber estatal de actuación para preservar los derechos humanos. Se hace un desarrollo desde la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado numerosas sentencias sobre la temática, que se refleja, por ejemplo, en el deber de realizar una investigación seria y en un plazo razonable, de los quebrantos de los derechos humanos

Parte del desarrollo que se ha llevado a cabo de los derechos humanos en los últimos tiempos es el correspondiente a los derechos de las víctimas, que también es tratado en el presente libro. Se trata de un tema fundamental, relacionado con el acceso a la justicia, el derecho a ser oído y el derecho que se evite una nueva revictimización, por ejemplo. Por otro lado, no puede desconocerse que en gran parte del desarrollo que se ha hecho del derecho de las víctimas, por ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es sobre los derechos de aquellos que fueron víctimas, dentro del sistema penal, cuando se les había atribuido algún hecho que se consideraba delictivo, por las autoridades estatales.

La voluntad de llevar esta obra, y la colección que inaugura, al mayor nivel de difusión posible, se ha materializado a través de un acuerdo de colaboración entre las casas editoriales de Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, y de España, J.M. Bosch Editor, para publicar esta obra en ambos países con identidad de contenidos, como un esfuerzo de divulgación científica conjunto sobre una materia que trasciende los marcos del interés jurídico y político criminal nacionales. Los Derechos humanos en los entresijos del Sistema penal constituyen una materia de tal magnitud y transversalidad, que el esfuerzo

editorial de acompasar ese alcance con esta doble publicación exige el reconocimiento y agradecimiento de autores y directores de la colección.

Alajuela y Jerez de la Frontera, 31 de enero de 2022



**Directores** Miguel Bustos Rubio | Alfredo Abadías Selma

#### La violencia filio-parental: una visión interdisciplinar. 2020

Alfredo Abadías Selma | Roberto Pereira Tercero (Coordinadores)

# 2 Aporofobia y Delito. La discriminación socioeconómica como agravante (art. 22,4ª CP.). 2020

Miguel Bustos Rubio

# El diseño de la política criminal. 2020

Demelsa Benito Sánchez

# 4 Aporofobia y plutofilia: la deriva jánica de la política criminal contemporánea. 2020

Juan María Terradillos Basoco

## Una década de reformas penales. Análisis de diez años de cambios en el Código Penal. 2020

Miguel Bustos Rubio | Alfredo Abadías Selma (Directores)

## 6 La Justicia Transicional en el ámbito del Derecho penal Internacional. 2020

Sergio Cámara Arroyo

# Criminalidad organizada. Tratamiento policial y judicial. 2020

Manuel Cerrada Moreno



**Directores** Miguel Bustos Rubio | Alfredo Abadías Selma

# Libro homenaje a D. Elías Carranza. 2020

Tomás Montero Hernanz (Coordinador)

9 El delito de violencia habitual: consideraciones en relación a la despenalización de los "micromachismos". 2020

María Concepción Gorión Barranco

La vertiente moral del derecho de autor: su incongruente tutela en el ámbito penal. Un estudio de derecho comparado. 2020

Paula Beatriz Bianchi Pérez

■ El deporte como actividad anómica. Una investigación criminológica sobre la infracción de las normas en competiciones deportivas. 2021

Marco Teijón Alcalá

Justicia cautelar e inteligencia artificial. La alternativa a los atávicos heurísticos judiciales Análisis de 10 años. 2021

Pere Simón Castellano

**S** Conversaciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Análisis de 10 años. 2021

Víctor Martínez Patón

## 14 Criminología aplicada. 2021

Beatriz Romero Flores (*Directora*) Ana Luz Cuervo García | Agustina María Vinagre González (*Coordinadoras*)



**Directores** Miguel Bustos Rubio | Alfredo Abadías Selma

# Del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas a la prisión permanente revisable. 2021

Mª del Mar Martín Aragón

# Temas clave de Derecho penal. Presente y futuro de la política criminal en España. 2021

José León Alapont (Director)

## **☑** El delito de autocapacitación terrorista

(Art. 575.2 CP). 2021

Carmen González Vaz

# Salud mental y privación de libertad: aspectos jurídicos e intervención. 2021

Ricardo M. Mata y Martín (*Director*) | Tomás Montero Hernanz (*Coordinador*)

# **19** La evolución del encarcelamiento en España (1971-2020). Un estudio de series temporales. 2021

Alfonso Serrano Maíllo

#### 20 Cuestiones penales a debate. 2021

Pere Simón Castellano | Alfredo Abadías Selma (Coordinadores)

#### 21 Reinserción y prisión. 2021

Ricardo M. Mata y Martín (*Director*) | Tomás Montero Hernanz (*Coordinador*)

# 22 Delincuencia organizada transnacional y protección de testigos: qué, cómo y por qué. 2022

Diego Montes Noblejas



**Directores** Miguel Bustos Rubio | Alfredo Abadías Selma

# Principios y garantías penales y procesales en la doctrina de la CIDH y el TEDH. 2022

Javier Llobet Rodríguez | Luis Ramón Ruiz Rodríguez (Coordinadores)